

Ley	Jacinto Dávila
<p><b>Artículo 1.</b> Esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de la información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se presten a las personas impulsando la transparencia del sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía, así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, garantizar la independencia tecnológica, la apropiación social del conocimiento, así como la seguridad y defensa de la Nación</p>	

**Artículo 2.-** Están sometidos a la aplicación de la presente Ley:

1. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Estatal.
3. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en los Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en las Dependencias Federales.
6. Los institutos públicos nacionales, estatales, de los distritos metropolitanos y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela.
8. **Las universidades públicas**, así como cualquier otra institución del sector universitario de naturaleza pública.
9. Las demás personas de derecho público nacionales, estatales, distritales y municipales.
10. Las sociedades de cualquier naturaleza, las fundaciones, **empresas**, asociaciones civiles y las demás **creadas con fondos públicos** o dirigidas por las personas a las que se refiere este artículo, en las que ellas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuados por las personas referidas en el presente artículo **representen el cincuenta o más de su presupuesto.**
11. Las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular.
12. Las personas naturales o jurídicas, en cuanto les sea aplicable, en los términos establecidos en esta Ley.
13. Las demás que establezca la Ley.

<p><b>Artículo 3.-</b> Esta Ley tiene como fines:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<b>Facilitar el establecimiento de relaciones</b> entre el Poder Público y las personas a través de las tecnologías de información.</li> <li>•Establecer las <b>condiciones necesarias y oportunas</b> que propicien la <b>mejora continua de los servicios</b> que el Poder Público presta a las personas, contribuyendo así en la <b>efectividad, eficiencia y eficacia</b> en la prestación de los <b>servicios públicos</b>.</li> <li>•Universalizar el acceso de las personas a las <b>tecnologías de información libres</b> de y <b>garantizar su apropiación</b> para beneficio de la sociedad.</li> <li>•Garantizar el <b>ejercicio de los derechos</b> y el <b>cumplimiento de los deberes</b> de las personas, <b>a través de las tecnologías de información</b>.</li> <li>•Promover el <b>empoderamiento</b> del Poder Popular a través de la generación de medios de participación y organización de las personas, haciendo uso de las tecnologías de información.</li> <li>•<b>Garantizar la transparencia de la gestión pública</b>, facilitando el acceso de las personas a la <b>información pública</b>.</li> <li>•<b>Apoyar</b> el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública y el ejercicio de la <b>contraloría social</b>.</li> <li>•Contribuir en los modos de organización y funcionamiento del Poder Público, apoyando la <b>simplificación de los trámites</b> y procedimientos que éstos realizan.</li> <li>•Establecer los principios para la <b>normalización y estandarización</b> en el uso de las tecnologías de información, a los todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley.</li> <li>•<b>Promover</b> la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formación, socialización, uso e implementación de las <b>tecnologías de información libres</b> a todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley.</li> <li>•<b>Establecer</b> las bases para el <b>Sistema Nacional de Protección y Seguridad de la Información</b>, en los términos establecidos en la presente Ley y demás normativa aplicable.</li> <li>•Fomentar la <b>independencia tecnológica</b> y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional, <b>sobre</b> la base del conocimiento y uso de las <b>tecnologías de información libres</b> en el Estado</li> </ul>	<p>El reglamento debe definir los protocolos que regulen el establecimiento de relaciones entre el poder público y el poder popular-</p> <p>Aspectos básicos: Identidad digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Privacidad</li> <li>- Derecho al seguimiento de los procesos, tickets de servicio.</li> <li>- Derechos a réplica en servicios de información.</li> </ul> <p>Debe incluir la definición técnica de los medios y protocolos de participación del poder popular en las TICs.</p> <p>Definir grandes estrategias para la transparencia informática y la conexión con la ley de simplificación de trámites administrativos.</p> <p>Definir los protocolos de estandarización de aplicaciones.</p> <p>Definir el principio del trámite más breve, más eficaz y más eficiente.</p> <p>Definir la arquitectura del sistema nacional de protección y seguridad a cargo de la Suscerte.</p>
--	---

<p><b>Artículo 4.-</b> Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la <b>efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia</b> de la gestión pública; profundizar la <b>participación</b> de la ciudadanía en los asuntos públicos; el <b>empoderamiento</b> del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional.</p>	<p>Precisar la definición de actuación y de interacción entre personas mediada por TICs.</p>
---	--

<p><b>Artículo 5.-</b> A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:</p> <p>•<b>Actuación electrónica:</b> Capaz de producir efectos jurídicos.</p> <p>•<b>Acceso abierto:</b> Característica de los documentos públicos que se refiere a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier usuario <i>leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet.</i> La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la <b>integridad de sus trabajos</b> y el derecho a ser adecuadamente <b>reconocidos y citados</b>.</p> <p>•<b>Código fuente:</b> Texto escrito en un lenguaje de programación específico, contentivo de un conjunto de instrucciones que se puede compilar para generar un programa que se ejecuta en un computador, es el conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación específico, que al ser procesadas por los compiladores e interpretadores adecuados, generan exactamente dicho programa que es ejecutado por el computador.</p> <p><b>Conocimiento libre:</b> Es todo aquel conocimiento que puede ser <b>aprendido, interpretado, aplicado, enseñado y compartido libremente y sin restricciones</b>, pudiendo ser utilizado para la resolución de problemas o como punto de partida para la generación de nuevos conocimientos.</p> <p>•<b>Criptografía:</b> Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad también de la Informática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de hacer ilegible, cifrar y proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.</p> <p>•<b>Documento electrónico:</b> Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.</p> <p>•<b>Estándares abiertos:</b> Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de las tecnologías de información, y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementadas.</p> <p>•<b>Hardware libre:</b> Dispositivos de hardware, componentes electrónicos o mecánicos diseñados para su uso en cualquier área científico técnica, cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, garantizando el total acceso al conocimiento de su funcionamiento y fabricación, y que reconociendo los derechos de autor, <b>no están sometidos a normativas legales del sistema de patentes de apropiación privativa</b>, otorgándose las mismas libertades contempladas en el software libre para su uso con <b>cualquier propósito y en cualquier área de aplicación</b>, libertad de modificación y adaptación a necesidades específicas, y la libertad para su redistribución.</p> <p>•<b>Informática forense:</b> también llamado <b>computo forense</b>, computación forense, análisis forense digital o examen forense digital es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal.</p>	<p>El reglamento debe aclarar que todo documento público, debidamente anonimizado, debe ser de acceso abierto. En particular,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manuales</li> <li>- decretos.</li> <li>- proclamas</li> <li>- informes</li> <li>- ordenanzas TIC (Definir).</li> </ul> <p>Debe definirse un protocolo para abrir un documento al público.</p> <p>Deben definirse protocolos de anonimizado de documentos (para eliminar información particular de las personas).</p> <p>Aclarar qué significa independencia del sistema de patentes.</p> <p>Debe definirse un protocolo de reporte de software y hardware privativo que no sea estrictamente necesario.</p> <p>Debe definirse los conceptos básicos de la informática forense y protocolos críticos para la seguridad informática, tales como “cadena de custodia” y anonimizado de datos personales.</p> <p>También se requiere un</p>
---	--

<p><b>Artículo 6.-</b> El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, <b>debe utilizar</b> las tecnologías de información en su <b>gestión interna</b>, en las <b>relaciones</b> que mantengan entre los <b>órganos</b> y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las <b>personas</b> y con el <b>Poder Popular</b>, de conformidad con esta Ley y demás normativa aplicable.</p> <p>El Poder Popular debe utilizar las tecnologías de información en los términos y condiciones establecidos en esta Ley y demás normativa aplicable.</p>	<p>Hace falta definir el alcance de este deber:</p> <p>¿Cuáles proceso se automatizarán?</p> <p>¿Cómo se procederá? (Protocolo para proponer procesos susceptibles de automatización)</p> <p>¿Cómo se verificará la utilización del sistema automático? (Protocolo para evaluación del aprovechamiento de sistemas automáticos)</p> <p>¿Cómo se sancionarán las faltas a este deber?</p>
<p><b>Artículo 7.-</b> La obligación establecida en el artículo anterior en <b>ningún caso se entenderá como un modo de restricción o discriminación</b> para las personas, por lo que, el acceso a la prestación de los servicios públicos, como a cualquier actuación del Poder Público, debe ser garantizada por <b>cualquier medio existente</b>, sin perjuicio de las <b>medidas que la presente Ley y demás normativa aplicable establezcan</b>, con el fin de <b>hacer efectivo el derecho</b> de las personas a utilizar las tecnologías de información en sus relaciones con el Estado.</p>	<p>¿Cómo se enfatiza la automatización y se preservan los otros medios en los casos que no se automaticen?</p> <p>¿Cómo validar que el derecho se hace efectivo?</p>

<p><b>Artículo 8.-</b> En las relaciones con el Poder Público y el Poder Popular, <b>las personas tienen derecho a:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Dirigir peticiones de cualquier tipo</b> haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.</li> <li><b>2. Realizar pagos, presentar y liquidar impuestos</b>, cumplir con las obligaciones pecuniarias y <b>cualquier</b> otra clase de <b>obligación</b> de esta <b>naturaleza</b>, haciendo uso de las tecnologías de información.</li> <li><b>3. Recibir notificaciones</b> por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensajes de datos y demás normativa aplicable.</li> <li><b>4. Acceder a la información pública a través de medios electrónicos</b>, con igual grado de <b>confiabilidad</b> y <b>seguridad</b> que la proporcionada por los medios tradicionales.</li> <li><b>5. Acceder electrónicamente</b> a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos se encuentren, así como <b>conocer y presentar los documentos electrónicos</b> emanados de los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, haciendo uso de las tecnologías de información.</li> <li><b>6. Utilizar y presentar</b> ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los <b>documentos electrónicos</b> emitidos por éste, en <b>las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro medio</b>, de conformidad con la presente Ley y demás normativa aplicable.</li> <li><b>7. Obtener copias de los documentos electrónicos</b> que formen parte de procedimientos en <b>los cuales tengan la condición de interesado</b>.</li> <li>Disponer de <b>mecanismos</b> que permitan el ejercicio de la <b>contraloría social</b> haciendo uso de las tecnologías de información.</li> <li>Utilizar las tecnologías de información libres como <b>medio de participación y organización</b> del Poder Popular.</li> </ol>	<p><b>Artículo reglamento:-</b></p> <p><b>Las personas tienen derecho a poseer una identidad electrónica y la correspondiente certificación digital en los términos que establece la ley y este reglamento.</b></p> <p><b>Definir identidad electrónica y derechos correlativos de privacidad e intimidad.</b></p> <p><b>Definición de trámite, tanto por vía electrónica como por otros medios.</b></p> <p><b>Protocolos estándar para realizar peticiones y solicitudes al poder público.</b></p> <p><b>Protocolo para realizar pagos, y liquidar impuestos.</b></p> <p><b>Protocolo y elementos requeridos para recibir notificaciones. Relación entre identidad y correo electrónico.</b></p> <p><b>Disclaimer: El usuario es responsable de proteger su identidad electrónica.</b></p> <p><b>Se requiere la definición precisa de los derechos de acceso.</b></p> <p><b>Prohibición expresa de copias impresas si se pueden entregar electrónicas.</b></p> <p><b>Definición de formatos abiertos y protocolos para entregar documentos electrónicos.</b></p> <p><b>Protocolo para intercambio de documentos electrónicos entre poder</b></p>
---	---

<p>Artículo 9.- Las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular, deben sujetarse a la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la presente ley y las normas que rigen la materia.</p>	
<p><b>Artículo 10.-</b> Las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se <b>conservarán</b> de conformidad con las condiciones que determine la Ley y demás normativa aplicable.</p>	<p><b>Artículo del reglamento:-</b></p> <p><b>Cada una de las organizaciones sometidas a esta ley creará y preservará cuidadosamente una memoria electrónica de las comunicaciones, documentos y actuaciones que realicen.</b></p> <p><b>Los funcionarios y funcionarias serán directamente responsables de la integridad de esa memoria y de su preservación en el largo plazo.</b></p> <p><b>Queda expresamente prohibido eliminar o alterar la memoria organizacional o permitir que esto ocurra por acciones internas o externas. Cualquier corrección a la que haya lugar se agregará preservando los documentos en sus versiones previas y referenciándolos adecuadamente a la</b></p>



<p><b>Artículo 11.-</b>El Poder Público <b>debe contar con repositorios digitales</b> en los cuales se almacene la información que manejen, así como <b>los documentos</b> que conformen el <b>expediente electrónico</b>, a fin de que sean accesibles, conservados o archivados, de conformidad con la presente Ley y demás normativa que regule la materia.</p> <p>El Poder Popular está sometido a la obligación aquí establecida en los términos y condiciones que a tal efecto <b>se dicten</b>.</p>	<p>Protocolo y principios de acuerdos de servicio para una institución que se afilia a un repositorio.</p> <p>Protocolo de afiliación de un repositorio a la red nacional de repositorios.</p> <p>Definición de expediente electrónico.</p>
<p><b>Artículo 12.-</b> El Poder Público y el Poder Popular <b>deben registrar</b> ante la autoridad competente <b>los programas informáticos</b> que <b>utilicen o posean</b>; su licenciamiento, código fuente y demás información y documentación que determine la norma instruccional correspondiente.</p>	<p>Protocolo de registro de programas informáticos</p>
<p><b>Artículo 13.-</b>El uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular <b>garantiza el acceso de la información pública</b> a las personas, facilitando al máximo la <b>publicidad de sus actuaciones</b> como requisito esencial del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, <b>salvo</b> aquella información clasificada como <b>confidencial</b> o <b>secreta</b>, de conformidad con la ley que regule el acceso a la información pública.</p>	<p>Protocolo de verificación de visibilidad pública.</p> <p>Protocolo de anonimizado y de aseguramiento de la condición confidencial de la información</p>
<p><b>Artículo 14.-</b> El Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, participa en el <b>desarrollo</b>, implementación y uso de las tecnologías de información libres, a fin de garantizar a las personas, en igualdad de condiciones, <b>el acceso y la apropiación social</b> del conocimiento asociado a esas tecnologías.</p>	<p>Protocolo para proponer proyectos de desarrollo de TICS en el poder público y en el poder popular.</p>

<p><b>Artículo 15.-</b> En el diseño y desarrollo de los sistemas, programas, equipos y servicios basados en tecnologías de información, se debe prever las consideraciones de <b>accesibilidad</b> y <b>“usabilidad”</b> necesarias para que estos puedan ser utilizados de forma universal por aquellas personas que, por razones de discapacidad, edad, o cualquier otra <b>condición de vulnerabilidad</b>, requieran de diferentes tipos de soportes o canales de información.</p>	<p>Protocolo de validación de accesibilidad y usabilidad para el software y el hardware del poder público y el poder popular.</p>
<p><b>Artículo 16.-</b> Es deber del Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, garantizar a todas las personas, a <b>través del sistema educativo</b> los <b>medios</b> para la formación, socialización, difusión, innovación, investigación y comunicación en materia de tecnologías de información <b>libres</b>, según los lineamientos de los <b>órganos rectores</b> en las materias.</p>	<p>Definición de áreas temáticas, objetivos de estudio y competencias esperadas para programas de formación de usuarios y usuarias TICs.</p>
<p><b>Artículo 17.-</b> El Poder Público debe <b>proporcionar la formación</b> en materia de tecnologías de información libres de <b>sus respectivos colectivos laborales</b>, para que interactúen con los sistemas y aplicaciones, desempeñando eficientemente sus labores y funciones en la gestión pública. Asimismo debe facilitar la formación de las personas, a fin de garantizar la apropiación social del conocimiento.</p>	
<p><b>Artículo 18.-</b> Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, <b>deben contar con un portal de Internet bajo su control y administración</b>. La integridad, veracidad y actualización de la <b>información</b> publicada y los servicios públicos que se presten a través de los portales <b>es responsabilidad del titular del portal</b>. La información contenida en los portales de Internet tiene <b>el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan</b>.</p>	<p>Protocolo para certificación de información oficial. - ¿Cómo verificar integridad e identidad de un documento electrónico?</p>

<p><b>Artículo 19.-</b> Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular a través de los portales de Internet deben ser accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y <b>auditables</b>, y deben contener información completa, actual, oportuna y veraz, de conformidad con la Ley y demás normativa aplicable.</p>	<p>Protocolos para contraloría social y validación de auditabilidad y veracidad de sistemas TICs</p>
<p><b>Artículo 20.-</b> El Poder Público y el Poder Popular están <b>obligados a garantizar</b> en sus portales de Internet el ejercicio del <b>derecho</b> de las personas a <b>participar, colaborar y promover</b> el uso de las tecnologías de información libres, <b>creación</b> de nuevos servicios electrónicos o <b>mejoramiento</b> de los ya existentes.</p>	<p>Protocolo para verificación del funcionamiento del buzón de sugerencias.</p>
<p><b>Artículo 21.-</b> Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular <b>deben contener mecanismos</b> que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la <b>contraloría social</b> como medio de participación de las personas y sus organizaciones sociales, para <b>garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente</b>, en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.</p>	<p>Protocolos de contraloría social, reporte y seguimientos de fallas.</p>
<p><b>Artículo 22.-</b> En las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular a través de las tecnologías de información, <b>sólo se exigirán a las personas las medidas de seguridad necesarias</b> según la naturaleza de los trámites y actuaciones a realizar. Igualmente, <b>se requerirán los datos que sean estrictamente necesarios</b> para tramitar los asuntos que haya solicitado, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios y derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.</p>	<p>Protocolo de reporte de abusos en las solicitudes de recaudos.  Protocolo de verificación de requisitos.</p>
<p><b>Artículo 23.-</b> En las actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se debe <b>garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información</b>, documentos y comunicaciones electrónicas, en cumplimiento a las normas y medidas que dicte el órgano competente en materia de seguridad de la información.</p>	<p>Reglamento de suscerte?</p>

<p><b>Artículo 24.-</b> El Poder Público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información, a través del <b>uso de certificados y firmas electrónicas</b> emitidas dentro de la <b>cadena de confianza</b> de certificación electrónica de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la legislación venezolana que rige la materia.</p>	<p>Protocolos de seguridad informática.</p>
<p><b>Artículo 25.-</b> El uso de las tecnologías de información por el Poder Público y el Poder Popular comprende la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas; en consecuencia, está sujeto a las limitaciones que establezca la ley sobre la materia.</p>	<p>Protocolo de reporte y seguimiento de fallas y violaciones del tipo descrito en este artículo.</p>
<p><b>Artículo 26.-</b> Los archivos y documentos electrónicos que emitan el Poder Público y el Poder Popular, que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la <b>misma validez</b> jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos en físico.</p>	<p>Protocolo de certificación de validez e integridad de un documento electrónico.</p>
<p><b>Artículo 27.-</b> Cuando la Ley exija que un documento debe ser <b>presentado</b> en formato impreso y se encuentre en formato electrónico, tal requisito <b>queda satisfecho</b> cuando éste se presente en formato <b>impreso</b> y <b>contenga un código unívoco</b> que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio digital institucional correspondiente, de conformidad con la normativa que rijan la materia.</p>	<p>Protocolo de certificación de validez e integridad de un documento electrónico.</p>
<p><b>Artículo 28.-</b> Los proyectos y acciones que desarrollen el Poder Público y el Poder Popular, a fin de consolidar el uso de las tecnologías de información libres en la gestión pública, <b>deben efectuarse de manera coordinada</b> en los términos establecidos en la presente Ley, y están orientados al logro de los fines y objetivos del Estado, sobre la base de las políticas, estrategias, lineamientos y normas que se dicten en la materia.</p>	<p>Protocolo de verificación de interoperabilidad entre proyectos y sistemas TIC del poder popular y del poder público.</p>

<p><b>Artículo 29.-</b> El Poder Público y el Poder Popular <b>colaborarán</b> para alcanzar la consolidación del uso de las tecnologías de información <b>libres</b> en el Estado.</p>	<p>Protocolo de verificación de interoperabilidad entre proyectos y sistemas TIC del poder popular y del poder público.</p>
<p><b>Artículo 30.-</b> Los procesos soportados en las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular deben ser interoperables, a fin de apoyar la función y gestión pública que éstos prestan, garantizando la cooperación y colaboración requerida para <b>proporcionar servicios y procesos públicos integrados, complementarios y transparentes</b>, sobre la base del principio de <b>unidad orgánica</b>.</p>	<p>Protocolo de verificación de interoperabilidad entre proyectos y sistemas TIC del poder popular y del poder público.</p>
<p><b>Artículo 31.-</b> El Poder Público debe procurar que el diseño y construcción de sus sistemas, programas, aplicaciones y servicios de información cuenten con <b>facilidades de uso para la consulta electrónica</b>, así como la <b>veracidad</b> y existencia de los documentos electrónicos, circunstancias o <b>requisitos que posean y sean necesarios para realizar una determinada solicitud, trámite o servicio</b>, sin que lo previamente descrito se le transfiera a las personas.</p> <p>El Poder Popular debe igualmente garantizar que sus sistemas informáticos, cuenten con las mismas facilidades previstas para el Poder Público establecidas en el párrafo anterior y lo que establezca la normativa correspondiente.</p>	<p>Protocolo de certificación de validez de un documento electrónico.</p> <p>Protocolo de verificación de requisitos en trámites públicos.</p>
<p><b>Artículo 32.-</b> El Poder Público tiene la <b>obligación de compartir entre sí la información pública</b> que conste en sus <b>archivos y repositorios digitales</b>, de conformidad con lo establecido en la ley que regule la materia sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, <b>salvo las excepciones establecidas</b> en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.</p> <p>El Poder Popular deberá <b>compartir información pública sobre la gestión de los servicios públicos</b> que se le hayan transferido, en los términos establecidos en el presente artículo y demás normativa aplicable.</p>	<p>Protocolo de verificación de interoperabilidad.</p>

<p><b>Artículo 33.-</b> El Poder Público debe contar con una <b>plataforma tecnológica integrada, bajo su control y administración</b>, que permita el efectivo uso de las tecnologías de información en sus relaciones internas, con otros órganos y entes, y en sus relaciones con las personas; apoyando la gestión del sector público y la <b>participación del Poder Popular en los asuntos públicos</b>.</p>	<p>Arquitectura general de los servicios de almacenamiento y preservación de datos del poder público y del poder popular.</p> <p>Protocolos de integración, interoperabilidad y control distribuidos de plataformas TICS del Poder público.</p>
<p><b>Artículo 34.-</b> El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por el Poder Público, <b>tiene como base el conocimiento libre</b>. En las actuaciones que se realicen con el uso de las tecnologías de información, <b>sólo empleará programas informáticos en software libre</b> y estándares abiertos para <b>garantizar</b> al Poder Público el <b>control</b> sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados.</p> <p>Los programas informáticos que se empleen para la gestión de los servicios públicos prestados por el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, deben ser en software libre y con estándares abiertos.</p>	<p>Protocolo para registro público de programas informáticos.</p> <p>Protocolo para reporte de violaciones de este artículo.</p>
<p><b>Artículo 35.-</b> Las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder Público, deben permitir el <b>acceso al código fuente</b> y a la transferencia del conocimiento asociado para su comprensión; su libertad de modificación; libertad de <b>uso en cualquier área, aplicación o propósito</b> y libertad de publicación y distribución del código fuente y sus modificaciones. <b>Únicamente</b> se adoptarán aquellas <b>licencias que garanticen que los trabajos derivados se licencien en los mismos términos que la licencia original</b>.</p> <p>El Poder Popular debe garantizar que las licencias de los programas informáticos empleados en la gestión de los servicios públicos transferidos, cumplan con las condiciones y términos establecidos en este artículo.</p>	<p>Protocolo de verificación de licenciamiento libre y de acceso al código fuente.</p>

<p><b>Artículo 36.-</b> El Estado <b>garantiza la apropiación social del conocimiento asociado a las tecnologías de información libres</b> que se desarrollen, adquieran, implementen y usen con el fin de emplearlas de forma independiente. Igualmente, aquellas <b>tecnologías privativas</b> en proceso de migración a tecnologías libres, <b>deben garantizar el uso y ejecución de modo independiente</b>. Para ello, se establecerán fuentes de financiamiento que impulsen programas y proyectos de investigación y desarrollo, fomenten la industria nacional de información libres y promueva la formación del talento humano en materia de tecnología de información libres, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley.</p>	<p>Protocolo de verificación de independencia de soportes privativos para las aplicaciones de software del poder público.</p> <p>Protocolo de reporte de dependencias privativas en software y hardware.</p>
<p><b>Artículo 37.-</b> Se crea el Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público, como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con las tecnologías de información, contribuyendo en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional. Es presidido por el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República y tendrá como fin promover y consolidar el uso, desarrollo, implementación y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el Poder Público, mediante la coordinación de las acciones que al efecto se establezcan.</p>	
<p><b>Artículo 38.-</b> El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público, está integrado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, en su condición de órgano directo y colaborador del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y en su condición de presidente o presidenta del Consejo Federal de Gobierno, que es quien lo preside</li> <li>2. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Planificación</li> <li>3. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Ciencia Tecnología e Innovación</li> <li>4. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Comunas</li> <li>5. La Procuraduría General de la República</li> <li>6. La Asamblea Nacional</li> <li>7. El Tribunal Supremo de Justicia</li> <li>8. El Consejo Nacional Electoral</li> <li>9. El Consejo Moral Republicano, y</li> <li>10. El Banco Central de Venezuela</li> </ol>	

<p><b>Artículo 39.-</b> El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público tiene las siguientes competencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular.</li> <li>2. Establecer lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libres.</li> <li>3. Impulsar la mejora de la gestión pública y calidad de los servicios públicos que se presten a las personas a través de tecnologías de información.</li> <li>4. Promover la transparencia en el Poder Público, a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.</li> <li>5. Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el Poder Público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad, con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias.</li> <li>6. Proponer ante las autoridades competentes el marco normativo necesario para garantizar el aprovechamiento y uso de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular, de conformidad con la presente Ley.</li> <li>7. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento, a través del respectivo reglamento que al efecto se dicte.</li> <li>8. Las demás que determine la ley.</li> </ol>	
<p><b>Artículo 40.-</b> Se crea la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, como un instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de gestión de recursos, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos por el órgano de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación, con los privilegios y prerrogativas de la República, y estará adscrito al Ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho Instituto tendrá su sede en la ciudad de Caracas, y podrá crear direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el resto del Territorio Nacional.</p>	



<p><b>Artículo 41.-</b> Son competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborar el <b>Plan Nacional de Tecnologías de Información</b> para el Estado, alineado con las directrices establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás planes de la Nación, en coordinación con el ministerio con competencia en materia de planificación pública, de conformidad con la ley aplicable.</li> <li>2. Establecer las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público.</li> <li>3. Establecer, de manera coordinada con La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el Poder Público.</li> <li>4. Establecer mecanismos de coordinación e intercambio con el Poder Público y con el Poder Popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales, especializadas en tecnologías de información y materias afines.</li> <li>5. Promover, conjuntamente con el Poder Público y con el Poder Popular, el acceso y uso de las tecnologías de información, a fin de contribuir en la gestión, incrementar la eficiencia, transparencia, y mejorar sus relaciones con las personas.</li> <li>6. Establecer las políticas de promoción, fomento y fortalecimiento del sector productivo de las tecnologías de información.</li> <li>7. Promover la formulación y ejecución de iniciativas que permitan impulsar la investigación, el desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular.</li> <li>8. Administrar el Repositorio de Programas Informáticos Libres y de programas informáticos utilizados por el Poder Público y por el</li> </ol>	<p>Protocolo general para la elaboración cooperativa y abierta del plan nacional de Tis.</p> <p>Protocolos para definición de políticas, dictámenes, lineamientos y ordenadas en TICs.</p>
<p><b>Artículo 42.-</b> El patrimonio de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará constituido por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los recursos anuales que le sean asignados en la Ley de Presupuesto;</li> <li>2. otros ingresos y bienes que le puedan ser asignados o transferidos por órganos y entes del Poder Público;</li> <li>3. los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de carácter lícito;</li> <li>4. sus ingresos propios, obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste;</li> <li>5. lo recaudado por tributos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;</li> <li>6. las multas por las infracciones de acuerdo a la presente Ley; los demás bienes que adquiera por cualquier título.</li> </ol>	

<p><b>Artículo 43.-</b> La Dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará a cargo de un Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará integrado por un Director o Directora General, quien presidirá el Instituto, y cuatro Directores o Directoras, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente, designado de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del Director o Directora General serán suplidas por el Director o Directora Principal que éste designe.</p>	
<p><b>Artículo 44.-</b> El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del Director o Directora General o quien haga sus veces y dos Directores o Directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes, y por unanimidad cuando ocurriere el quórum mínimo.</p> <p>El régimen ordinario de sesiones del Consejo directivo lo determinará el reglamento interno que dictará dicho ente.</p>	<p>Reglamento interno CONATI debe incluir el protocolo para toma de decisiones y para la designación de suplentes para llenar las faltas.</p> <p>El reglamento debe aclarar que la unanimidad aplica siempre que haya asistencia completa.</p>
<p><b>Artículo 45.-</b> No podrán ser designados Director o Directora General o , miembros del Consejo directivo ni suplentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República o de la máxima autoridad del órgano rector o de algún miembro de la dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</li> <li>2. Quienes en beneficio propio o de un tercero, directa o indirectamente, hayan celebrado contratos de obra o de suministro de bienes o servicios con la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información y no los hayan finiquitado en el año inmediatamente anterior a sus designaciones.</li> <li>3. Quienes tengan conflicto de intereses con el cargo a desempeñar.</li> <li>4. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos contra el patrimonio público.</li> </ol>	<p>Protocolo de verificación de conflictos de intereses.</p>

<p><b>Artículo 46.-</b> Los miembros del Consejo Directivo serán responsables civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las decisiones adoptadas en sus reuniones de acuerdo con las leyes que rigen la materia.</p>	
<p><b>Artículo 47.-</b> Al Consejo Directivo le corresponden las siguientes competencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Someter a la consideración del órgano rector todas las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público al igual que en el Poder Popular, cuando realice gestiones públicas.</li> <li>2. Aprobar y discutir el plan operativo anual y el balance general, así como los estados financieros de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, conforme a los proyectos presentados por el Director o Directora General.</li> <li>3. Dictar el reglamento interno de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</li> <li>4. Aprobar la creación, modificación o supresión de direcciones regionales que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.</li> <li>5. Aprobar el estatuto de los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.</li> <li>6. Autorizar al Director o Directora General para suscribir y actualizar convenios y contratos que tengan por objeto el desarrollo, comercialización, producción y agilización de actividades y proyectos vinculados con las tecnologías de información libres, previa autorización del órgano rector.</li> <li>7. Autorizar la suscripción y enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la ley que rige la materia.</li> <li>8. Autorizar al Director o Directora General de la Comisión Nacional de las Tecnologías, conjuntamente con dos miembros del Consejo Directivo, para abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del Instituto, cumpliendo con las normas que rigen la materia.</li> <li>9. Las demás que le confieren las leyes y sus reglamentos respectivos.</li> </ol>	

<p><b>Artículo 48.-</b> Corresponde al Director o Directora General de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejercer la representación del Instituto y emitir los lineamientos para organizar, administrar, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.</li> <li>2. Autorizar la realización de inspecciones o fiscalizaciones.</li> <li>3. Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios.</li> <li>4. Nombrar, remover o destituir al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria, de conformidad con el correspondiente estatuto.</li> <li>5. Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación del Consejo Directivo, convenios y contratos con organismos nacionales e internacionales, de conformidad con la ley.</li> <li>6. Dictar los lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto, el plan operativo anual y el balance general del Instituto, y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo, de conformidad con la ley.</li> <li>7. Otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Instituto.</li> <li>8. Delegar atribuciones para la firma de determinados documentos, en los casos que determine el reglamento interno del Instituto.</li> <li>9. Ejercer las competencias del Instituto que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.</li> <li>10. Elaborar y presentar el proyecto del reglamento interno del Instituto a la consideración del Consejo Directivo.</li> <li>11. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones.</li> <li>12. Presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Consejo Directivo y del ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>13. Las demás que le confieran la ley y los reglamentos.</li> </ol>	<p>Protocolos para realización de inspecciones y fiscalizaciones.</p>
<p><b>Artículo 49.-</b> Los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información se regirán por el Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento, selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones en el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las escalas de remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público; no pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos, ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</p>	

<p><b>Artículo 50.-</b> Son unidades de apoyo a los efectos de la presente Ley:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ente normalizador del uso de las Tecnologías de Información.</li> <li>2. El órgano normalizador en seguridad informática.</li> <li>3. Y cualquier otra instancia que esté vinculada con el objeto y fines de esta Ley.</li> </ol>	
<p><b>Artículo 51.-</b> El ente normalizador en materia de tecnologías de información y el órgano normalizador en seguridad de la información ejercerán las funciones de unidades de apoyo especializadas de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, en las materias de su competencia y de conformidad con las normas de funcionamiento que dicte la Comisión.</p>	<p>Protocolos de coordinación CONATI Suscerte</p>
<p><b>Artículo 52.-</b> El Centro Nacional de Tecnologías de Información, ente adscrito al órgano con competencia en tecnologías de información, es el <b>encargado de apoyar</b> a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información a normalizar el desarrollo, adquisición, implementación y uso de estas tecnologías en el Poder Público y en el Poder Popular, conforme a las políticas, lineamientos y estrategias que se establezcan al efecto.</p>	<p>Protocolo de coordinación CONATI CNTI</p>

<p><b>Artículo 53.-</b> El Centro Nacional de Tecnologías de Información tiene, en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proponer a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las líneas de investigación para el desarrollo de programas y equipos informáticos que apoyen la solución de problemas en el Poder Público y en el Poder Popular.</li> <li>2. Contribuir con la formación y difusión para la apropiación social del conocimiento en tecnologías de información libres en el país.</li> <li>3. Solicitar al Poder Público y al Poder Popular la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el ámbito de su competencia.</li> <li>4. Colaborar con la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información en la promoción del acceso e intercambio de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Poder Público, así como entre éstos y el Poder Popular.</li> <li>5. Ejercer las funciones de unidad de apoyo especializado para la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</li> <li>6. Presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector y a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</li> <li>7. Coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del Sistema Venezolano de la Calidad en materia de tecnologías de información en el Poder Público.</li> <li>8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás actos que se dicten, cuya vigilancia le compete.</li> <li>9. Las demás atribuciones que determine la Ley.</li> </ol>	<p>Protocolos de verificación de calidad en sistemas y servicios TICs</p>
<p><b>Artículo 54.-</b> La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, adscrita al ministerio con competencia en ciencia tecnologías e innovación, es el órgano competente en materia de seguridad informática, y es responsable del desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Informática, a fin de resguardar la autenticidad, integridad, inviolabilidad y confiabilidad de los datos, información y documentos electrónicos obtenidos y generados por el Poder Público y por el Poder Popular, así como la generación de contenidos en la red.</p>	

<p><b>Artículo 55.-</b> La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tendrá, en el ámbito de aplicación de esta Ley, las siguientes competencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar, implementar y coordinar el Sistema Nacional de Seguridad Informática.</li> <li>2. Dictar las normas instruccionales y procedimientos aplicables en materia de seguridad informática.</li> <li>3. Establecer los mecanismos de prevención, detención y gestión de los incidentes generados en los sistemas de información y en las infraestructuras críticas del Estado, a través del manejo de vulnerabilidades e incidentes de seguridad informática.</li> <li>4. Articular e insertar en el Poder Público y en el Poder Popular las iniciativas que surjan en materia de seguridad informática, dirigidas a la privacidad, protección de datos y de infraestructuras críticas, así como intervenir y dar respuesta ante los riesgos y amenazas que atenten contra la información que manejen.</li> <li>5. Proponer al órgano rector líneas de investigación asociadas a la seguridad informática que apoye la solución de problemas en el Poder Público y en el Poder Popular.</li> <li>6. Contribuir en la formación de las personas y del componente laboral, que promueva el establecimiento de una cultura de resguardo y control sobre los activos de información presentes en los sistemas de información.</li> <li>7. Realizar peritajes en soportes digitales, previo cumplimiento del procedimiento legal pertinente, apoyando a las autoridades competentes en investigaciones, experticias e inspecciones relacionadas con evidencias digitales.</li> <li>8. Evaluar los medios de almacenamiento digital, de acuerdo a los criterios de búsquedas establecidos en la solicitud de entes u organismos del Estado que así lo requieran.</li> <li>9. Extraer, revisar y analizar las trazas y bitácoras de equipos y herramientas de redes.</li> <li>10. Auditar el funcionamiento e integridad de aplicaciones y base de datos donde se presuma inconsistencias incorporadas con el objeto de causar daños.</li> <li>11. Prestar asesoría técnica en materia de informática forense a los órganos de apoyo a la investigación penal.</li> <li>12. Administrar el registro público de homologación de equipos o aplicaciones con soporte criptográfico.</li> <li>13. Ejecutar las funciones de unidad de apoyo especializado de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información en el Poder Público, en el área de su competencia.</li> <li>14. Presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector y a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</li> <li>15. Coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del Sistema Venezolano de la Calidad en materia de seguridad informática en el Poder Público y en el Poder Popular.</li> <li>16. Las demás que establezca la ley.</li> </ol>	<p>Definir la arquitectura general del sistema nacional de seguridad informática.</p> <p>Protocolos básicos para atención de eventos de seguridad informática</p>
--	---

<p><b>Artículo 56.-</b> La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, previo cumplimiento de las condiciones que determine la norma instruccional correspondiente, podrá acreditar a las personas naturales o jurídicas la cualidad de unidad de servicios de verificación y certificación, a fin de realizar funciones de auditoría sobre los programas informáticos, equipos de computación o servicios en materia de tecnologías de información a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por el Poder Público y por el Poder Popular, para constatar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normativa aplicable.</p>	
<p><b>Artículo 57.-</b> El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática tiene como objeto proteger, resguardar, mitigar, y mejorar la capacidad de respuesta del Poder Público y del Poder Popular frente a riesgos y amenazas derivados del desarrollo de los sistemas de información. El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática está integrado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subsistema de <b>Criptografía Nacional</b></li> <li>2. Subsistema Nacional de <b>Gestión de Incidentes Telemáticos</b></li> <li>3. Subsistema Nacional de <b>Informática Forense</b></li> <li>4. Subsistema Nacional de <b>Protección de Datos.</b></li> </ol> <p>El Reglamento respectivo establecerá los términos y condiciones de implementación del Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática.</p>	<p>Definir la arquitectura general del sistema nacional de seguridad informática.</p> <p>Protocolos básicos para atención de eventos de seguridad informática</p>
<p><b>Artículo 58.-</b> La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, con el objeto de garantizar la integridad, calidad e independencia tecnológica, <b>aprueba, certifica y homologa los equipos o aplicaciones</b> con soporte criptográfico que use el Poder Público y el Poder Popular.</p>	
<p><b>Artículo 59.-</b> La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica es el órgano encargado de supervisar y exigir los certificados de homologación o sellos de certificación por modelo o versión de los equipos o aplicación con soporte criptográfico. A tal efecto, lleva un <b>registro público del código de homologación</b> para proveedores de servicios de certificación de los entes u organismos del Poder Público y del Poder Popular que hayan sido homologados y certificados.</p>	
<p><b>Artículo 60.-</b> Todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de <b>software privativo</b> al Poder Público, pagarán a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información el dos y medio por ciento (2,5%), de la utilidad neta del ejercicio. Lo cancelado por este concepto, se realizará dentro de los noventa días siguientes del cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>El monto en bolívares de la cancelación de esta contribución, será <b>deducido</b> del pago del <b>Impuesto Sobre la Renta.</b></p>	



<p><b>Artículo 61.-</b> Toda persona que preste <b>servicios de software privativos</b> al Poder Público, pagará una contribución del uno y medio por ciento (1,5%) de la utilidad neta del ejercicio, a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.</p>	
<p><b>Artículo 62.-</b> El Poder Público debe solicitar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información la certificación del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normativa aplicable de los programas informáticos por equipos de computación según su tipo o modelo, el cual causa una tasa de 50 unidades tributarias.</p>	
<p><b>Artículo 63.-</b> La homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico, a que hace mención el artículo 58, tendrá una duración de tres años y su solicitud de tramitación causará una tasa de trescientas unidades tributarias. Las aplicaciones y equipos con <b>soporte criptográfico libre estarán exentos</b> del pago de la tasa prevista en el presente artículo.</p>	
<p><b>Artículo 64.-</b> La tramitación de la solicitud de acreditación o renovación como unidad de servicios de verificación y certificación se sustanciará de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y causará el pago de una tasa que no podrá ser mayor de treinta unidades tributarias ni menor a quince unidades tributarias.</p>	
<p><b>Artículo 65.-</b> La acreditación correspondiente contendrá, además de los extremos requeridos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y los previstos establecidos en el Registro Nacional de Contratistas los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tipo de acreditación que se trate</li> <li>2. La determinación de las características y de los servicios que presta</li> <li>3. El tiempo durante la cual se otorga no podrá ser superior a dos años</li> <li>4. La remisión expresa a la norma instruccional que contenga las funciones y obligaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación.</li> </ol>	
<p><b>Artículo 66.-</b> La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, excepcionalmente, podrá autorizar, hasta por tres años, la adquisición y el uso de software que no cumpla con las condiciones de estándares abiertos y software libre, <b>cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación.</b></p> <p>La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, al autorizar el uso del software privativo, establecerá las condiciones y términos para <b>el desarrollo de una versión equivalente en software libre</b> y estándares abiertos.</p>	<p>Protocolos para el otorgamiento de excepciones</p>

<p><b>Artículo 67.-</b> El órgano o ente del Poder Público al igual que el Poder Popular que sea autorizado a adquirir, usar y actualizar un software privativo, <b>debe pagar una contribución especial</b> al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación la cantidad equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) <b>del valor de adquisición del software privativo</b>. Este aporte debe efectuarse dentro del ejercicio fiscal correspondiente a la adquisición del programa.</p> <p>Igualmente, el órgano o ente del Poder Público y el Poder Popular deben pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor <b>correspondiente a los gastos asociados al soporte y uso del software privativo</b>.</p> <p>Las contribuciones a que se refiere este artículo deben efectuarse hasta que sea sustituido el software privativo por un software libre y con estándares abiertos.</p> <p>El reglamento respectivo determinará la base de cálculo de la alícuota de la contribución a pagar.</p>	<p>Protocolo para visibilizar requerimientos de desarrollo de software en el sector público.</p> <p>Protocolo para cálculo de contribuciones especiales.</p>
---	--

<p><b>Artículo 68.-</b> Los recursos producto de lo recaudado por concepto de contribuciones parafiscales y tasas, serán destinados al <b>desarrollo y fomento del sector de tecnologías libres</b> de información, en un monto no menor del cincuenta por ciento (50%) de recaudado, y el resto formará parte de los ingresos propios de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.</p>	
<p><b>Artículo 69.-</b> La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información ejercerá las facultades y deberes que atribuye el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria, en relación con los tributos establecidos en la presente Ley. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación ejercerá las facultades y deberes a los que se refiere este artículo, por lo que respecta a las tasas correspondientes al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>	

<p><b>Artículo 70.-</b> El Estado venezolano, a través del Ministerio con competencia en ciencia, tecnología e innovación, impulsa el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la Industria Nacional de Tecnología de Información Libres, garantizando el ejercicio de la soberanía tecnológica y el desarrollo integral de la nación. A tales fines, promueve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Programas de investigación</b> en los sectores prioritarios para el desarrollo nacional y la independencia tecnológica con tecnologías de información libres.</li> <li>2. La <b>investigación nacional</b> en tecnologías de información libres.</li> <li>3. <b>Polos de innovación regionales</b> en la República Bolivariana de Venezuela, que asocien la investigación con la Industria Nacional de Tecnologías de Información Libres.</li> <li>4. El financiamiento a la investigación, innovación y desarrollo en tecnologías de información libres, así como a la formación en estas tecnologías.</li> <li>5. <b>Programas que impulsen la creación de consultoras, creadores y creadoras independientes</b> en tecnologías de información libres.</li> <li>6. La creación y desarrollo de <b>empresas de propiedad social</b> en tecnologías de información libres, conforme al sistema económico comunal.</li> <li>7. Prospectiva tecnológica.</li> <li>8. Programas para captar y formar investigadores e investigadoras y potenciar el talento humano en tecnologías de información libres.</li> <li>9. La apropiación social del conocimiento mediante planes de formación en tecnologías de información libres.</li> <li>10. La creación, desarrollo y articulación de una <b>red nacional de soporte técnico</b> en tecnologías de información libres.</li> <li>11. La racionalización del uso de recursos mediante <b>el despliegue de infraestructura orientada a servicios de tecnologías de información libres</b>.</li> <li>12. <b>Una base de conocimiento que impulse la apropiación social</b> de las tecnologías de información libres.</li> <li>13. Impulsar y apoyar conjuntamente con el ministerio con competencia en materia de Comunas, la conformación de las <b>Comunas de Tecnologías Libres</b>, integradas por los usuarios, usuarias, activistas, colectivos y comunidades del software y hardware libres de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la presente Ley y demás normativa aplicable.</li> <li>14. Cualquier otro mecanismo que permita establecer incentivos que promuevan la industria nacional de tecnologías de información libres</li> </ol>	<p>Protocolos de servicios de la red nacional de soporte técnico en TIL</p>
--	---

<p><b>Artículo 71.-</b> El financiamiento con fondos públicos está <b>dirigido a impulsar un sistema económico</b> socio productivo de las tecnologías de información libres, que desarrolle las actividades de investigación, diseño, creación, desarrollo, producción, implementación, asistencia técnica, documentación y servicios relativos tanto al software y como al hardware libres.</p>	
<p><b>Artículo 72.-</b> El Ejecutivo Nacional podrá exonerar, total o parcialmente, el pago del impuesto por enriquecimiento neto a <b>la venta de bienes y prestación de servicios en tecnologías de información libres</b>, de acuerdo a lo establecido en la legislación que rige la materia tributaria.</p>	<p>Procedimiento para exoneración de impuestos para ventas de bienes y prestación de servicios con TIL</p>
<p><b>Artículo 73.-</b> El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación destinará, además de los aportes recaudados conforme a los artículos 63 y 64 de la presente Ley, <b>un porcentaje no menor al dos por ciento (2%)</b> de los recursos provenientes de los aportes <b>para</b> la ciencia, la tecnología y la innovación, al financiamiento de los programas y planes de promoción para consolidar <b>la industria nacional de tecnologías de información libres</b>, conforme a lo establecido en el artículo 70 de esta Ley.</p>	
<p><b>Artículo 74.-</b> La información que conste en los archivos y registros en el Poder Público y en el Poder Popular es de <b>carácter público, salvo</b> que se trate de información sobre el <b>honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad y defensa de la Nación</b>, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley que regule la materia sobre protección de datos personales y demás leyes que rigen la materia.</p>	

<p><b>Artículo 75.-</b> El Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, están <b>obligados a notificar</b> a las personas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que la información será <b>recolectada de forma automatizada</b>;</li> <li>2. <b>su propósito, uso y con quién será compartida</b>;</li> <li>3. las <b>opciones</b> que tienen para ejercer su <b>derecho</b> de acceso, ratificación, supresión y oposición al uso de la referida información y;</li> <li>4. las <b>medidas de seguridad</b> empleadas para proteger dicha información, el registro y archivo, en las bases de datos de los organismos respectivos.</li> </ol>	
<p><b>Artículo 76.-</b> El Poder Público y el Poder Popular <b>no pueden exigirle a las personas, la consignación de documentos en formato físico</b> que contengan datos o información que se intercambien electrónicamente, de conformidad con la ley.</p>	Definición de documento electrónico
<p><b>Artículo 77.-</b> El Poder Público y el Poder Popular tienen <b>la obligación de proteger la información</b> que obtiene por intermedio de los servicios que presta a través de las tecnologías de información y la que repose en sus archivos o registros electrónicos, en los términos establecidos en esta Ley, y demás leyes que regulen la materia.</p>	Protocolo para protección de la privacidad y anonimizado de la información pública.
<p><b>Artículo 78.-</b> Previa solicitud de la persona legitimada, el Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, pueden recopilar datos de niños, niñas y adolescentes en relación a sus derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.</p> <p>El receptor de los datos debe darle prioridad, indicar los derechos que lo asisten y la normativa aplicable para llevar a cabo el trámite solicitado en beneficio del niño, niña o adolescente. Una vez que se obtenga dicha información se empleará únicamente para efectuar el trámite.</p>	
<p><b>Artículo 79.-</b> La información a que se refiere el artículo anterior no puede ser divulgada, cedida, traspasada, ni compartida con ninguna persona natural o jurídica, sin el previo consentimiento de su representante legal, salvo cuando el menor de edad sea emancipado, en la investigación de hechos punibles, por una orden judicial, o cuando así lo determine la ley. El consentimiento expreso que se haya dado sobre la información del niño, niña o adolescente siempre puede ser revocado.</p>	
<p><b>Artículo 80.-</b> Todas aquellas personas que ejerzan una función pública, incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas a la presente ley.</p>	

**Artículo 81.-** Independientemente de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, todas aquellas personas en el ejercicio de una función pública, incurren en responsabilidad y serán sancionadas por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con multa comprendida entre cincuenta y quinientas unidades tributarias, por las siguientes infracciones:

1. Omitan la elaboración, presentación o implementación del Plan Institucional de Tecnologías de Información, en los términos señalados en la presente Ley y en la normativa aplicable.
2. Cuando ordenen o **autoricen**, el desarrollo, adquisición, implementación y uso de **programas, equipos o servicios** de tecnologías de información **que no cumplan con las condiciones y términos establecidos** en la presente ley y normativa aplicable a la materia, sin previa autorización de la autoridad competente.
3. Cuando incumplan las normas instruccionales, normas técnicas y estándares dictados por la autoridad competente de conformidad con la ley.
4. Cuando **no registre ante la autoridad competente los programas informáticos** que utilicen o posean; su licenciamiento, código fuente y demás información y documentación de conformidad con la ley.
5. Cuando en sus actuaciones electrónicas, **omitan** el uso de **certificados** y firmas electrónicas.
6. Cuando usen **equipos o aplicaciones con soporte criptográfico sin la correspondiente aprobación, certificación y homologación de la autoridad competente.**
7. Cuando **altere** un dato, información o documento suministrado por los servicios de información.
8. Cuando **emplee para fines distintos** a los solicitados, los datos, información o documentos obtenidos a través de un servicio de información.
9. **Cuando niegue, obstaculice o retrase la prestación de un servicio de información.**
10. Cuando niegue o suministre en forma completa o inexacta información sobre el uso de las tecnologías de información, seguridad informática o interoperabilidad.
11. **Exigir la consignación, en formato físico, de documentos** que contengan datos de autoría, información o documentos que se intercambien electrónicamente.
12. Cuando incumplan **los niveles de calidad establecidos** para la prestación de los servicios de información.
13. Celebrar, por sí o por intermedio de terceros, acuerdos que tengan por objeto, el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado, sin la autorización previa de la autoridad competente.

<p><b>Artículo 82.-</b> La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información puede delegar en las Unidades de Apoyo, el inicio y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios por las infracciones cometidas a la presente ley.</p>	
<p><b>Artículo 83.-</b> Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República de Venezuela, de manera exclusiva y excluyente, <b>inhabilitará al servidor público</b>, en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando <b>se niegue, obstruya o retrase</b>, de manera injustificada, <b>la prestación de un servicio de información</b> que haya sido ordenado por la autoridad competente conforme a la ley.</li> <li>2. Cuando <b>adquiera un software privativo sin haber sido autorizado</b> expresamente por la autoridad competente.</li> </ol>	<p>Protocolo de contraloria de servicios de información.</p> <p>Protocolo de reporte de software o hardware adquirido en violación de la ley.</p>



<p><b>Artículo 84.-</b> La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información revocará las acreditaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorguen conforme a la presente Ley, siguiendo el procedimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las causas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la norma instruccional correspondiente para el otorgamiento de la acreditación o certificación.</li> <li>2. El suministro de datos falsos para obtener la acreditación.</li> <li>3. Cuando en la fiscalización, inspección o auditoria de un programa informático, equipo de computación o servicio de información, se hayan incumplido los procedimientos en los términos establecidos en las normas instruccionales correspondientes.</li> <li>4. Cuando haya certificado un programa informático, equipo de computación o servicio de información sin cumplir las disposiciones de la presente ley y demás normativa aplicable.</li> </ol>	<p>Protocolo de validación y acreditación de certificación de seguridad.</p>
--	--

<p>PRIMERA.- El Poder Público y el Poder Popular, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, deben registrar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información los programas informáticos que estén usando o posean, licencias y demás documentación asociada, de conformidad con la normativa instruccional correspondiente.</p> <p>SEGUNDA.- En caso que algún órgano o ente del Poder Público o el Poder Popular, para el momento de entrada en vigencia de la presente Ley, cuente con tecnologías de información que no cumplan con lo aquí establecido, deberán presentar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, dentro de los doce meses siguientes, un plan institucional de adaptación o migración de la tecnologías de información para su aprobación.</p> <p>TERCERA.- El Poder Público y el Poder Popular deberán elaborar los planes institucionales correspondientes para implementar el uso de las tecnologías de información libres en su gestión interna, en sus relaciones con otros órganos y entes, con el Poder Popular y con las personas. Estos planes deberán ser presentados ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, en las condiciones y términos que establezca la norma instruccional correspondiente y podrá ordenarse la aplicación de los correctivos necesarios cuando contravengan la ley y la normativa que corresponda</p> <p>Cuarta.- A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la presente Ley, el Centro Nacional de Tecnologías de Información y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, procederan a su reestructuración, adecuación, organización y funcionamiento de conformidad con las competencias atribuidas en esta Ley, y se establece un lapso máximo de diez meses para tales efectos.</p>	<p>Protocolo para registro público de programas informáticos (base mínima de metadatos).</p> <p>Protocolo para la elaboración de planes de migración y liberación de software.</p> <p>Protocolo para validación de licencias compatibles con la ley de infogobierno.</p> <p>Protocolo para intercambio de información entre instituciones públicas y del poder popular.</p>
<p>PRIMERA.- Se deroga el Decreto N° 3.390 de fecha 23 de diciembre de 2004, mediante el cual se dispone que al Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos, y servicios informaticós, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004.</p> <p>SEGUNDA.- Se deroga Capítulo I del Título III y el Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes de Estado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012.</p>	<p>Protocolos para intercambio de información entre instituciones públicas y del poder popular.</p>

<p>PRIMERA.- <b>Todo programa informático que se desarrolle, adquiera o implemente en el Poder Público, después de la entrada en vigencia de esta Ley, deberá ser en software libre y con estándares abiertos</b>, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley y previa autorización del ente competente.</p>	<p>Protocolo para el otorgamiento de excepciones.</p>
<p>SEGUNDA.- El Poder Público deberá proceder a <b>la digitalización de sus archivos físicos</b>. Los mensajes de datos que resulten de esta digitalización serán firmados electrónicamente por la persona autorizada, con el fin de certificar dichas copias electrónicamente.</p>	
<p>TERCERA.- La presente Ley entrará en vigencia una vez transcurrido diez meses contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.</p>	<p>Protocolo para la digitalización progresiva de archivos públicos.</p> <p>Protocolos para firmado electrónico de documentos oficiales.</p> <p>Protocolo para el otorgamiento de firmas electrónicas certificadas a los ciudadanos y ciudadanas.</p>

Luigino Bracci	Santiago Roca
<p>Otro problema que tal vez se pueda abordar en el reglamento, son los frecuentes avisos de prensa y en redes sociales por parte de entes públicos, solicitando personal que trabaje usando determinadas aplicaciones y software privativo. Adjunto como ejemplo esta solicitud por parte de la Alcaldía de Caracas, de un editor audiovisual que trabaje con el software propietario de edición de videos Final Cut, y el software de composición gráfica Adobe After Effects.</p> <p><a href="https://twitter.com/AlcaldiadeCcs/status/657191812600352768">https://twitter.com/AlcaldiadeCcs/status/657191812600352768</a> Estos casos son MUY frecuentes, y tienen un efecto muy contraproducente: por un lado, desestimulan a los estudiantes a especializarse en el uso de aplicaciones libres, pues presumen que, de hacerlo, serán descartados para el mercado laboral. Por otro dificultan mucho la migración, pues cuando dicho ente finalmente comprenda la necesidad de migrar, nos vamos a topar con personal especializado en sofEs necesario que la Conati envíe exhortos continuos y se busque la forma de sancionar a entes públicos que continúen en esta actitud. No sé si a través del reglamento. Tware propietario con una altísima resistencia al cambio.</p>	<p>Es necesario establecer el objeto del reglamento. El objeto es establecer los mecanismos para garantizar la implementación de la Ley de Infogobierno en cuanto a favorecer el desarrollo nacional de tecnologías de información, la participación popular y la transparencia en la gestión de gobierno, promover la seguridad y la independencia tecnológica y fortalecer la soberanía nacional.</p> <p>El reglamento de la Ley no debería ser simplemente un instructivo para la dedicación de los fondos públicos recolectados a la inversión social, aunque eso debe estar presente.</p>

--	--

--	--

	Debe haber un artículo que reitere el interés público y estratégico de las tecnologías de información libres, como piedra angular de la presente norma.
--	---






Reglamentar el modo de envío de las peticiones, trámites, notificaciones. Cómo se realizan y cuándo se consideran conducentes a respuestas concretas

Reglamentar el modo de acceder a información pública, expedientes y obtener copia de documentos. Cómo se realiza y cuándo se consideran conducentes a respuestas concretas

Reglamentar el modo de ejercer la contraloría, la organización y la participación popular. Cómo se realiza y cuándo se consideran conducentes a respuestas concretas

	<p>Establecer el modo de conservación y archivo de los documentos. En algún lugar deben establecerse las condiciones de indexado y búsqueda de las actuaciones.</p>

	<p>Reglamentar los repositorios digitales del Poder Público.</p> <p>El Poder Público debe facilitar los recursos físicos e informático de archivos al Poder Popular como servicio gratuito. Es decir, no se provee directamente la infraestructura, se provee un servicio gratuito (o con una tasa simbólica) de almacenamiento en repositorio mantenido con fondos públicos y aportes por Ley</p>
	<p>Describir qué significa información clasificada como confidencial y secreta. Hacer una definición extensiva (enumeración de los casos) pero dejar abierto para la inclusión de otros casos a criterio de la autoridad correspondiente</p>

	<p>Establecer condiciones de acceso y usabilidad de acuerdo con estándares aceptados en la legislación nacional o normas internacionales. O incluir referencia a tales normas</p>
	<p>Establecer condiciones de formación. Dado por sentado que los centros de formación son responsables de esta tarea, ¿cómo se controla su efectivo cumplimiento? ¿quiénes son los responsables?</p>
	<p>El portal web será un servicio centralizado a cargo del estado, pero debe tener una infraestructura física y de servicios que garantice la seguridad y robustez</p> <p>Formular o hacer referencia a las condiciones de seguridad y certificación electrónica de la información vigentes en normas nacionales o estándares internacionales</p> <p>Establecer garantías de cumplimiento de la información oficial, como por ejemplo responsables y penalidades. ¿Es la contraloría? ¿Defensoría?</p>

	<p>Establecer garantías de auditabilidad. Responsables y consecuencias de incumplimiento</p> <p>Garantía de su carácter vinculante y de su celeridad</p>
	<p>Garantías de participación. Mecanismos de formación y apoyo general a la producción de tecnologías libres. ¿Responsabilidad en el MPPEUCT?</p> <p>Facilitar medios para que los nuevos desarrollos cumplan con estándares de seguridad y certificación. Por ejemplo que sean evaluados con celeridad por las instancias de apoyo a esta Ley</p>
	<p>Garantías, responsables, penas por incumplimiento. Vinculación de la Contraloría Social y de los entes estatales vinculados con el Poder Comunal y con el Poder Ciudadano</p>
	<p>Reglamentar el tema de los trámites. Se podría hacer una enumeración de las condiciones para que los trámites se cumplan de acuerdo con esta Ley</p>
	<p>Garantías, responsables, penas por incumplimiento. Reglamentar el tema de las actuaciones electrónicas. Se podría hacer una enumeración de las condiciones o para que las actuaciones se cumplan de acuerdo con esta Ley</p> <p>Condiciones de Seguridad y certificación.</p>

	<p>Garantías, responsables, penas por incumplimiento.</p> <p>Reglamentar el tema de las actuaciones electrónicas. Se podría hacer una enumeración de las condiciones que definen las condiciones de seguridad y certificación, así como las cadenas de responsabilidades para que se cumpla la Ley</p> <p>Describir las condiciones de Seguridad y certificación.</p>
	<p>Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables, penas por incumplimiento</p>
	<p>Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables, penas por incumplimiento</p>
	<p>Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables.</p> <p>Enumerar las condiciones o pasos para garantizar la coordinación entre Poder Público y Poder Popular</p>

	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables.
	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables.



	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables.
	El artículo es bastante explícito en cuanto al tipo de licencia. No obstante es necesario aclarar que las licencias deben adaptarse al interés nacional basados en el papel estratégico de las TIL. Hacer algún tipo de mención de las excepciones establecidas en esta Ley (art. 74)

	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables.










--	--


	Se podría buscar un especialista en tributos para que aporte a estos artículos.
	Definir , enumerar las condiciones que sustentan esta decisión

Otra sugerencia que quería hacer fuera del reglamento, es que la Conati busque la forma de trabajar en conjunto con las personas, grupos, asociaciones y empresas que desarrollan aplicaciones de software libre, con el fin de contratar personal venezolano (programadores y desarrolladores) que puedan ayudar a mejorar su desarrollo. Esto yo lo considero tan o más importante que el desarrollar distribuciones GNU/Linux especializadas, que es otra de las soluciones que se han ensayado en Venezuela (me refiero a las diferentes variantes de Canaima GNU/Linux que se han intentado crear para resolver problemas en determinadas áreas y disciplinas). Si nosotros logramos que desarrolladores venezolanos programen módulos y porciones de aplicaciones libres como Gimp, LibreOffice, Inkscape o similares, una vez estas mejoras se incorporen a las aplicaciones, se verán replicadas en TODAS las distribuciones de GNU/Linux existentes, incluyendo futuras versiones de Debian y Canaima GNU/Linux. Además, Venezuela será reconocida a nivel mundial como un país que hace significativos aportes al desarrollo del software libre y no como un país "chulo" que se descarga y usa aplicaciones libres, sin hacer mayores aportes a su mejora. Esto lo comento a propósito de los artículos 66 y 67 de la Ley de Infogobierno, en los que se establece que un porcentaje del dinero que se use para comprar software privativo irá al desarrollo de aplicaciones libres. Pero en Venezuela hemos tenido una gran tendencia a hacer "forks" o hacer nuevas aplicaciones libres desde cero, a menudo con fracasos espectaculares, en vez de trabajar con quienes han creado aplicaciones libres muy funcionales, a las que sólo les falta uno o dos modulitos para ser aplicaciones tan robustas como sus equivalentes propietarios.


El reglamento podría enumerar en esta sección quiénes son los entes responsables del cumplimiento de estos planes, cuáles son las normativas que aplican. Además la pertinencia de la relación con el Plan Nacional y los Planes Sectoriales. Debería haber un ente que concentre la supervisión de esta línea, quizá la Vicepresidencia de Planificación del Conocimiento

	<p>El reglamento podría enumerar en esta sección quiénes son los entes responsables del cumplimiento de estos planes, cuáles son las normativas que aplican. Además la pertinencia de la relación con el Plan Nacional y los Planes Sectoriales. Debería haber un ente que concentre la supervisión de esta línea, quizá la Vicepresidencia de Planificación y/o la Vicepresidencia Socioproductiva</p>
	<p>Estas son algunas de las excepciones. Podrían enumerarse algunos casos y dejarlo abierto. Es necesario permitir maniobrabilidad al mismo tiempo que impedir la utilización de subterfugios para la violación de la Ley. El único ítem que se atiene al interés nacional es el de Seguridad y Defensa de la Nación. Habría que hacer una definición amplia de este ítem para abarcar cuestiones de importancia estratégica para el país.</p>



	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables, penas por incumplimiento.
	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables, penas por incumplimiento.
	Garantías, medios técnicos y jurídicos, responsables, penas por incumplimiento.

--	--

<p>En muchos entes públicos, se están evadiendo los pasos necesarios para la adquisición de software privativo (es decir, el acudir a la Conati a solicitar la autorización, etc.) simple y llanamente instalando y usando copias ilegales de los programas (quemaitos, programas descargados de Internet y crackeados, etc.) Al no ser necesario desembolsar dinero para hacer la compra de software original, no hace falta ir a la Conati a solicitar permiso alguno, o al menos así piensan ellos. No sé si esto se pueda considerar de alguna forma en el reglamento, pero creo que se requieren más medidas políticas que sancionatorias. De nada sirve colocar las peores sanciones del mundo, si los ministros, viceministros y directores raras veces conocen de la importancia política de la migración a software libre y estimulan a su personal a ignorar estas leyes y reglamentos con el fin de lograr salir de la próxima contingencia: hoy son las elecciones del 6-D, mañana será el evento tal, luego será la feria tal, o las guarimbas, o la guerra económica, o el siguiente problema grave que afrontemos. Se avanza de emergencia en emergencia, de crisis en crisis sin resolver los problemas, hasta que llega el momento en el que el ministro es cambiado o rotado, llega personal nuevo y hay que intentar desde cero la hazaña de convencerlos (desde abajo hacia arriba, es decir: el personal subordinado tratando de convencer a sus nuevos jefes de que el software libre funciona).</p>	

--	--


Desde el punto de vista del reglamento, creo que hará falta algo que indique que el uso de software ilegalmente copiado no puede convertirse en excusa para el incumplimiento de la ley. No sé de qué manera, pero creo que hace falta.

objeto

--	--

poder

público



	<p>información</p> <p>tecnologías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Protocolo</b> Protocolo, ok</li> <li>- <b>Identidad</b> Identidad digital es un aspecto importante. Identificación única ante todos los sistemas públicos. Seguimiento de procesos automáticos con "Ticket digitales". Pensar en la descongestión</li> <li>- <b>Procesos</b> Procesos simplificados. Los procesos son electrónicos y manuales. En los procesos manuales involucrar la gestión de IPOSTEL Educar al usuario- usuaria en el uso de los códigos postales. El aspecto educativo al usuario- usuaria es de relevancia y no se le presta mucha atención. Pensar los procesos con el "principio de buena fe de los usuarios"</li> <li>- <b>Seguridad</b> Confidencialidad de la información.</li> <li>- <b>Trámites</b> Además, asociar tiempos de respuesta a las gestión pública.</li> </ul>
--	---

	ok
--	----

información

tecnologías

<p>En torno a la definición de acceso abierto, en el Reglamento debe tratarse con especial cuidado el tema de “dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos”, porque ello puede ser contradictorio con la libertad de modificar que se está planteando en otros artículos de la ley.</p>	<p>El término <b>infraestructura crítica</b> se debe definir bien.</p> <p>¿Quien establece o evalúa o declara que una infraestructura es crítica? ¿Hay un proceso de verificación de esa declaración?</p> <p>Donde dice "... y no permite soluciones alternativas..." ¿es un escape para el software privativo?.</p> <p>¿Se llevará un control de uso de los software privativos "insustituibles"? ¿por cuanto tiempo ?</p>	información	cualquier
--	---	-------------	-----------

<p>El Poder Popular no sólo debe estar facultado por la ley para utilizar las tecnologías de los procesos de información, sino que también debe o puede involucrarse en los procesos de desarrollo y apropiación social de ese conocimiento.</p>	<p>De acuerdo. Hay que establecer cuales son los procesos automáticos</p>	<p>poder</p>	<p>debe</p>
	<p>OK. El trámite puede realizarse manual y electrónico.</p> <p>Educación en el uso de los trámites electrónicos</p>	<p>cómo</p>	<p>personas</p>

	De acuerdo. Dar preponderancia al documento electrónico. Sustituir en lo posible el uso de copias en papel
--	--

poder

electrónicos

		poder	popular
Definir los mecanismos de conservación de las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas.	<b>Una memoria perfecta debe ser propia (hardware propio)</b> <b>¿Que tan grande va a ser esa memoria?</b> <b>¿ Que espacio de tiempo se va a registrar?</b> <b>¿ Como resguardar esa memoria?</b>	memoria	documentos

Desarrollar la infraestructura nacional (técnica, económica y humana) para almacenar la información. Proponer la creación de un sistema nacional distribuido de repositorios digitales.	Mi observación anterior esta relacionada también con este artículo. Hay que establecer políticas de respaldo y recuperación de datos.	poder	repositorios
Se debe establecer la obligatoriedad del registro ante la autoridad competente.		poder	registro
		Información	pública
		poder	desarrollo

De forma explícita garantizar la apropiación social de las tecnologías de información para las personas con discapacidad o en cualquier otra condición de vulnerabilidad.	OK.	información	usabilidad
	No solo enseñar tecnologías libres, también usarlas en los distintas dependencias. Por ejemplo, los centros de investigación	formación	investigación
	ok.	debe	formación
Se debe establecer el apoyo técnico, económico y humano para el desarrollo de portales de internet en las instituciones que no cuenten con ello.	¿La verificación de un documento electrónico debe hacerlo un tercero?	información	portal



Insistir en que los portales de internet deben contener información actualizada y deben contemplar todos los procesos y actuaciones que realizan los órganos y entes del poder público y el poder popular.	. <b>Estándares para interfaz gráfica de los portales.</b>	deben	portales
	.	poder	apoyo
No sólo garantizar la transparencia y eficiencia de la inversión pública sino implementar los mecanismos necesarios para involucrar al poder popular en el accionar público.	seguimientos de fallas y acaso sanciones por omisión ?	poder	contraloria
	. <b>siempre garantizando la protección contra usurpación de identidad, robo de información .</b>	trámites	infomación
	OK.	electrónicas	actuaciones

	ok	certificación	condiciones
	ok	poder	confidencialidad
	Muy bien, promover el uso de documentos digitales. Los organismos que soliciten documentación para algún trámite debe estar en capacidad de aceptar los documentos digitales	poder	documentos
Quizás sea conveniente crear un artículo de definiciones adicionales en el que se pueda incluir, por ejemplo, la definición de código unívoco.	<b>Garantizar la persistencia por emisión del usuario (las últimas emisiones, por ejemplo) y no por años.</b>	formato	electrónico
	ok	poder	popular

	ok	poder	interoperabilidad
	ok.	poder	procesos
	Esto impactaría en la simplificación de trámites	poder	protocolo
	Los funcionarios no lo delegarían al usuario.	Información	poder

	Con servicios propios, ncluyendo el correo electrónico, con plataforma tecnológica propia.	poder	público
	Y también hardware propio.	información	tecnologías
Se debe promover la generación y uso de licencias nacionales para el software que se desarrolla en el país.		licencias	libertad

	ok

libres

poder

poder

tecnologías

público

competencia


poder

público

nacional

república


poder

público

ley

bienes

	.
	.....
	.

director

directora

consejo

unanimidad

nacional

intereses



	.
	.

consejo

directivo

comisión

tecnologías

	..
	.

instituto

directivo

nacional

comisión

	.
	.
	.

ley

normalizador

comisión

información

poder

nacional

	.
	.

poder

información

poder

superintendenci  
a

	.
--	---

poder

informática

	.	poder	cumplimiento
Establecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática y de cada uno de los subsistemas: funciones, vinculaciones, actores participantes, entre otros.		nacional	protección
	.	poder	certificacion
	.	poder	superintendenci a
	.	ejercicio	bolívares

	la misma inquietud de Jacinto ¿Las nubes extranjeras pagarán esta contribución?	contribución	comisión
	.	comisión	tributarias
	ok	soporte	tasa
	.	unidades	tributarias
	.	servicios	acreditación
	.	software	condiciones

Determinar la base de cálculo de la alícuota de la . contribución a pagar.	
--	--

software

aplicaciones



	.
	.

recaudado

contribuciones

nacional

deberes

	Incentivos para las investigaciones que usen SL. Y los investigadores que se resisten a cambiar ? Como atraerlos?
--	---

información

tecnologias

	.	vicepresidencia	libres
	.	bienes	servicios
	.	ley	aportes
También tiene un tratamiento especial la información asociada a niños, niñas y adolescentes, de modo que debería quedar claro en el reglamento.		información	nación

	.	información	poder
	.	poder	formato
	.	información	poder
	.	trámite	información
	.	información	puede
	.	responsabilidad	administrativa

--	--

nformación

competente

En el reglamento se debe describir el procedimiento administrativo sancionatorio.		procedimientos administrativos
		software sanciones

	.
--	---

certificación

acreditación




--	--

Palabra 3	Palabra 4	Palabra 5	
tecnologías	información	reglamento	protocolo

órganos      entes      ejercen

personas procesos pública

protocolo

libres

interés

estratégico

público

accesso

uso

libertad

popular utilizar tecnologías

derecho efectivo cualquier si

información documentos tecnología



actuaciones competencias constitución

actuaciones comunicacion conservación  
es

público      servicios      digitales

autoridad      programas      competente      si

confidencial      protocolo      clasificada      si

tecnologías      protocolo      tics      si

si

accesibilidad discapacidad vulnerabilidad

responsables libres tecnologías

si

garantizar conocimiento público

debe oficial poder

si

contener información auditabilidad

tecnologías libres nuevos si

mecanismos seguimiento garantizar si

actuaciones poder protocolo si

poder información condiciones si

electrónicas seguridad información

reputación intimidad limitaciones si

digitales archivos validez si

documento código impreso si

público proyectos protocolo si

si

consolidación colaborarán libres

proyectos gestión pública si

sistemas requisitos trámites si

normativa aplicable compartir si

pública si

plataforma    tecnológica    servicios

programas    informáticos    poder    relaciones    si

código    fuente    términos    libre    si

si

información    independient    protocolo  
e

información    tecnologías    consejo  
si

consejo    ministerio    popular



información tecnologías uso

comisión lineamientos normativas

información    tecnologías    materia

ingresos    asignados    acuerdo

si

general consejo directivo

reglamento decisioines interno

tecnologias información comisión

si

responsables administrativa disciplinarias  
mente

información nacional aprobar

consejo      conformidad    reglamento

tecnologías    información    cargos

si

ente            informática    seguridad

normalizador   conati            coordinación

información    tecnologías    conati

si

si

nacional      comisión      tecnologías

seguridad      información      inviolabilidad      si

seguridad      materia      nacional



servicios      comisión      auditoria

informática      sistema      seguridad

superintende      aprueba      criptográfico  
ncia

si

homologació      certificados      servicios  
n

contribución      monto      fiscal

público      pagarán      privativos

aplicable      tasa      certificación

equipos      aplicaciones      criptográfico

pago      certificación      tramitación

procedimientos      administrativos      leyes

nacional      abiertos      estándares

si

poder

pagar

privativo

si

parafiscales    tecnologías    información

facultades    ejercerá    tributaria

libres      desarrollo      nacional

financiamient o	Socio- productiva	conocimiento
--------------------	----------------------	--------------

prestación	impuesto	enriquecimie nto
------------	----------	---------------------

conforme	fondo	nacional	si
----------	-------	----------	----

poder	materia	público
-------	---------	---------

uso                      notificar                      seguridad

físico                  documento      electrónico

obligación      servicios      protocolo

normativa      datos      derechos      si

ser consentimient compartida  
0

cometidas personas incurren

autoridad documentos servicios



sancionatorio infracciones cometidas  
s

autoridad competente inhabilitará

si

información   programa   computación

si

si

si

44